

N/REF: 0024/2023

La consulta plantea si resulta conforme con la normativa de protección de datos la comunicación por parte de la Comisión al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz —a través de su Policía Local— de los datos contenidos en el “*Sistema de Gestión de Datos de Abonado (SGDA)*” para tener acceso a los datos de los abonados para la gestión de llamadas de **emergencia** a través del número 092.

I

La comunicación planteada supondrá una cesión de datos de carácter personal, que deberá fundarse en alguna de las bases jurídicas establecidas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

En primer lugar, sobre el cumplimiento de la obligación legal de permitir la prestación del servicio de *directorio telefónico* en condiciones de competencia efectiva y la específica cesión de datos que la misma conlleva, ya se expresó por la Agencia Española de Protección de Datos el criterio de que la misma *encontraba* tal habilitación legal en la *antigua Ley 11/1998*, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Así consta en el informe emitido por el Gabinete Jurídico de esta Agencia con fecha 6 de marzo de 2001, habiéndose igualmente emitido informe de fecha 23 de julio de 2002 en relación con el procedimiento para proporcionar tal información por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a tenor de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 26 de marzo de 2002, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.

Con carácter general, según se expone en los citados informes, la comunicación de los datos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia encuentra *su fundamento en la obligación legal* de garantía de la libre competencia en el mercado, que reconoce el interés legítimo de las entidades que pretendan prestar el servicio de guía telefónica sobre números de abonado o de información sobre números de abonado en poder prestar dicho servicio en condiciones de libre competencia.

En la actualidad, la norma con rango de ley formal que habilita la cesión de datos, tanto en dicho supuesto, **como en el sometido a informe**, es la **Ley 11/2022**, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones —**LGTel**—.

La garantía del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal aparece expresamente reconocida entre los objetivos y principios de la Ley 11/2022, de 28 de junio, al establecer dentro de los mismos el artículo 3 k):

“defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de un acceso abierto a internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección a las personas con discapacidad, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones;”

En relación con el acceso a la información sobre el número de abonados, esta Agencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, tal y como recuerda el Informe 1/2022, y, más recientemente —tras la entrada en vigor de la nueva LGTel—, el **Informe 53/2022**, en el que se señala:

“Los criterios mantenidos en los citados informes son igualmente aplicables tras la entrada en vigor de la reciente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que en su artículo 72.2, al regular las guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado, establece tanto la obligación de los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, así como la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular. Asimismo, dicha regulación debe

ponerse en relación con el artículo 65.1.o), que después de reconocer el derecho de los usuarios finales a impedir la identificación de su línea lo excluye cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto”.

En concreto, en cuanto al deber de suministro de la información para la prestación en libre competencia de los servicios de edición de directorios telefónicos o realización de consultas telefónicas, el artículo 72.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, prevé que:

“Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada información y su posterior utilización a la presente ley y su normativa de desarrollo”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:

- a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;
- b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado;
- c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el artículo 74; (la negrita es nuestra)**
- d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.2. (...)”

Y, concretamente, en cuanto a los *“Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público”*, la exclusión de los usuarios finales a impedir la identificación de su línea cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112, se contiene en el **apartado o) del 65.1**, cuando señala:

- “1. Los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores, según corresponda, de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público son, entre otros, los siguientes, que serán objeto de desarrollo mediante real decreto:
(...)”

o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada.

Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto. (la negrita y el subrayado son nuestros)

Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea; (...)”

Asimismo, el artículo 66.3 dispone que:

“Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos: a) A figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la prestación de los servicios de información sobre números de abonado; b) A ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión; c) A no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre números de abonados que se presenten en el mercado”.

Entrando ya en el contenido concreto de la consulta, para el supuesto que nos ocupa —referido a las comunicaciones de emergencia—, de acuerdo con la regulación introducida por la vigente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, se obtiene que dicho tratamiento de datos vendrá legitimado por la concurrencia de la base jurídica del **artículo 6.1.c. RGPD**. En efecto, la citada norma incorpora de manera clara la existencia de una *obligación legal aplicable* al responsable en relación con el tratamiento de los datos personales a los que se refiere este informe —ex artículos 72, 74 y 65.1. o) LGTel—.

Y, a su vez, la necesaria protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física se constituye —asimismo— en base legítima para la cesión de los datos con información de carácter personal. Por ello, las comunicaciones de datos de carácter personal se ampararían también en el apartado **d)** del **artículo 6.1** del Reglamento General de Protección de Datos.

En consecuencia, a tenor de los preceptos a los que se ha hecho mención, **la licitud** para el tratamiento de los datos de carácter personal para

“la gestión de llamadas de emergencia a través del número 092” de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, **resulta de la concurrencia de ambas causas** de legitimación, esto es, tanto por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, como por la protección de intereses vitales, conforme, respectivamente, a los **apartados c) y d)** del artículo 6.1. RGPD.

II

Un adecuado análisis de la cuestión concreta relativa a la cesión del directorio de números de abonados para la prestación **de servicios de emergencia** exige, asimismo, el estudio concreto de la legislación aplicable con carácter general a los servicios de emergencia.

En lo que a la *legislación estatal* se refiere, la materia que nos ocupa aparece presidida por la **Ley 17/2015**, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que señala en su artículo 1.1 que *“La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.”*

El artículo 7 bis) se refiere al deber público de todos los ciudadanos de colaborar en la protección civil, disponiendo que:

“1. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley.

2. En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan.”

A su vez, el apartado 8 de dicho precepto indica que *“Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil.”*

La legislación estatal en este punto aparece completada por el **Real Decreto 903/1997**, de 16 de junio, que regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112.

Dicho Real Decreto instituye el número telefónico 112, según su artículo 2, como aquel que *“podrá utilizarse por los ciudadanos para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos competentes en materia de atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y, por la posible necesidad de coordinar los anteriores, de protección civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan”*.

Es decir, como un mecanismo para requerir la asistencia de los servicios de emergencias correspondientes, pero no determina que dicho servicio 112 sea competente para responder a las emergencias, sino que redireccionará la solicitud de actuación a los servicios que en cada caso sean competentes. El art. 2.2 establece: *“Para garantizar la respuesta y atención adecuadas de las llamadas que se produzcan y asegurar una actuación rápida, ordenada y eficaz de los mencionados servicios, en el ámbito de las funciones y competencias que a cada uno le correspondan, las entidades prestatarias del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 adoptarán las medidas necesarias en relación con los servicios de urgencia de su dependencia y establecerán los acuerdos o convenios de colaboración que sean precisos cuando tales servicios no sean de su titularidad”*.

Además, en lo que a la identificación de la línea llamante afecta, el artículo 3.3 preceptúa:

“(...) Asimismo, dichos operadores facilitarán la identificación automática de la línea o zona geográfica desde donde se efectúen las llamadas al número telefónico 112, dentro de las posibilidades técnicas de la red y de acuerdo con la regulación que sobre las facilidades de presentación y limitación de la línea llamante se establezcan en la normativa nacional y comunitaria para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad de la vida humana o razones de interés público.

En todo caso, lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las medidas que se adopten para garantizar el secreto de las comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3 de la Constitución, y la protección de los datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y en sus normas de desarrollo y disposiciones complementarias”.

Tratándose del municipio de Torrejón de Ardoz, la **Ley 25/1997, de 26 de diciembre**, de la Comunidad de Madrid, de regulación del servicio de atención de urgencias 1-1-2, tiene por objeto la regulación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único 112 en el ámbito territorial de la *Comunidad de Madrid*.

En la letra i) del artículo 6.1 de dicha norma, se menciona expresamente a las **policías locales**, en relación con el deber de colaboración que les incumbe respecto de los mandatos establecidos en esta.

A su vez, en la Disposición Adicional Única de esta Ley, se dispone que *“La coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado con los servicios a los que se refiere esta ley se hará respetando en todo caso las normas específicas que regulan la organización y actuación de aquéllas.”*

Por su parte, el Título VI del **Decreto 87/2018, de 12 de junio**, del Consejo de Gobierno —de la Comunidad de Madrid—, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, regula la actividad de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid **112**.

En el **artículo 23** de dicho Decreto, se dispone que *“1. Corresponde a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ejercer las competencias previstas en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, respecto de los centros directivos adscritos a la misma y, en particular, el impulso, coordinación, apoyo y supervisión de las actividades que competen a la consejería en materia de: a) Coordinación de los servicios operativos pertenecientes a la Comunidad de Madrid con competencias en materia de seguridad, atención y gestión de emergencias, (...) c) Prevención y extinción de incendios y salvamentos, d) Protección civil. e) Atención de llamadas al número único europeo 112 (...) f) Coordinación y demás facultades en relación*

con las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, g) Formación y calidad en materia de seguridad y emergencias, h) Coordinación del Grupo Operativo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), (...) l) Asimismo, coordinará la acción del Organismo Autónomo Madrid 112.”

Por su parte, de acuerdo con el **artículo 26** del citado Decreto 87/2018, de 12 de junio, corresponde a la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, además de las previstas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, las siguientes competencias:

“(…)

k) Colaboración con SUMMA 112, organismo gestor y coordinador de las urgencias/emergencias sanitarias, para la elaboración de los procedimientos de activación de los recursos sanitarios en emergencias en la Comunidad de Madrid. En esta colaboración se contará igualmente con otros servicios de emergencias y organismos de seguridad y salud en el trabajo existentes en la Comunidad de Madrid.

l) Impulso y seguimiento de los procedimientos de actuación conjunta de los diferentes servicios de emergencia que actúan en la Comunidad de Madrid.

m) Gestión de los recursos logísticos disponibles para la atención de emergencias y catástrofes, así como la elaboración del catálogo de recursos movilizables en casos de emergencia.

n) La dirección y coordinación operativa de los grupos de acción movilizados en aplicación de planes, de competencia autonómica, en materia de protección civil.

o) El diseño, definición e implantación de una política de calidad en materia de emergencias, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General competente en materia de calidad.”

En cuanto al ámbito propio de la Administración Local, los artículos 25.2 y 26.1 de la **Ley 7/1985, de 2 de abril**, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, disponen lo siguiente:

“**Artículo 25**

(…)

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
(...)”

“Artículo 26

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
(...)

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
(...)”

En conclusión, de acuerdo con todo lo anterior, la coordinación de la actividad relativa a la gestión de emergencias por parte de las policías locales, y —en el caso que nos ocupa— por parte de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, a través del número de marcación rápida 092, se incardina en el marco regulatorio general al que se ha hecho mención en los apartados anteriores.

III

Centrado así el objeto del debate, tal y como se adelantó anteriormente, se desprende que la comunicación de los datos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la mejor prestación del servicio de emergencias 112 —o, tal y como se plantea en el presente caso, a través del **número corto 092**—, encuentra su fundamento, **tanto en la base jurídica del 6.1.c. RGPD**, al venir determinada por el cumplimiento de obligaciones legales, **como por la necesaria protección de intereses vitales**, conforme a los apartados **c) y d)** del artículo 6.1.del RGPD.

A mayor abundamiento, para el supuesto sometido a informe, las conclusiones anteriores deben ponerse en relación con lo dispuesto en la **Orden CTE/711/2002**, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de

abonado, entre cuyo objeto se encuentra el referido en su Apartado Primero, 3. c), cuando prevé:

“Primero. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto:

(...)

3. La regulación del suministro de los datos sobre abonados que los operadores están obligados a proporcionar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que, de acuerdo con los citados artículos 67.1 y 14 del Reglamento del Servicio Universal, ésta pueda ponerlos a disposición de las entidades que:

a) Elaboren guías telefónicas impresas o electrónicas.

b) Provean servicios de consulta telefónica sobre números de abonados, mediante autorización general tipo D, a través de los códigos que se regulan en el capítulo IV de la presente Orden.

c) Presten servicios de llamadas de urgencia a través del número 112, y otras entidades que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por prestar servicios de llamadas de urgencia a través de números cortos. (la negrita y el subrayado son nuestros).

d) Estén autorizados para solicitar información previa a la interceptación en virtud del artículo 89.1 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.”

Por su parte, para la atención del servicio de llamadas de urgencia, el Apartado Decimoquinto 2) de dicha Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, dispone que:

“2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, previa petición, facilitará a las entidades que presten servicios de llamadas de urgencia a través del número 112, *y a otras entidades* que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por prestar servicios de *llamadas de urgencia a través de números cortos*, la información actualizada a la que se refiere el punto 1 del apartado decimocuarto, con el formato que se acuerde entre las partes. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente como soporte para una efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de urgencia, siendo responsabilidad de la entidad prestataria el adecuado uso de los mismos, que estará sometido a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.”

En resumen, tal y como se viene exponiendo, la cesión de Base de Datos de Abonados Telefónicos al Servicio de Emergencias 112 está claramente instrumentada como consecuencia de la obligación, impuesta por la

ley, de que dicho servicio identifique la llamada entrante, con determinados datos que se especifican en el transcrito Apartado Decimoquinto 2) de la Orden CTE/711/2002, para la atención del servicio de llamada de urgencia.

Así literalmente tanto dicha Orden como la restante normativa citada, especifica que la comunicación de los datos en cuestión es “*para una efectiva prestación de los servicios de atención de llamadas de urgencia*”. Tal y como se expone, la cesión se ampara en el interés vital del interesado. Es decir, el interés vital del interesado se contempla en la cesión de datos de los abonados de los directorios telefónicos como causa legitimadora, de conformidad con las previsiones legales al respecto.

En definitiva, entendemos que la **cesión** de la Base de Datos de Abonados Telefónicos por la CNMC a los Servicios de Emergencias 112 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz —a través de su policía local— para prestar el servicio de información telefónica para la atención de emergencias, **también a través del número corto 092**, además de obtener su legitimación de lo previsto en el **apartado c)** del artículo 6.1, resulta también **conforme** con la normativa de protección de datos en razón de lo dispuesto en el **apartado d)** del mismo precepto del RGPD.

IV

Por otra parte, el *apartado Sexto* de la Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la **Circular 1/2013**, relativa al procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de guías, consulta telefónica sobre números de abonado y emergencias —BOE de 25 de abril de 2013—, establece las condiciones aplicables a las entidades habilitadas sobre el suministro de los datos de los abonados, enumerando en su punto 1 las siguientes:

- “a. La información solicitada será tratada única y exclusivamente para la prestación del servicio y/o para la finalidad para la que fue entregada.
- b. Los datos de los abonados que hayan sido suministrados serán actualizados conforme a lo dispuesto en la presente Circular.
- c. Los servicios prestados por las entidades con derecho a obtener la información de los abonados deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses desde la resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones otorgando el suministro, y se prestarán con las características, el contenido y en las condiciones previstas en la normativa específica que los regula.
- d. Se garantizará el respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos y, en particular, al derecho de información contenido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal y su normativa de desarrollo, cuya salvaguardia corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.”

Añade el punto 2 que *“el incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigibles a las entidades habilitadas comportará la revocación del suministro de los datos de los abonados a esa entidad, mediante resolución motivada de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos”*.

De este modo, la utilización de los datos para una finalidad distinta de la *exclusivamente* prevista por el Ordenamiento podrá dar lugar al inicio de las correspondientes actuaciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Finalmente, el órgano consultante deberá garantizar el pleno respeto de la legislación vigente en materia de protección de datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos, así como de lo establecido en la restante normativa vigente en materia de protección de datos, cuya salvaguardia corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.